

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera
de la capital. 10
Un semestre id. id. . . . 6
Un trimestre id. id. . . . 4
Números sueltos. 0.25
Se publica todos los dias
excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa, sujetos á la legislación peninsular, á los veinte dias de su promulgacion, si en ella, no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el dia en que termine la insercion de la ley en la *Gaceta*.
Artículo 1.º del Código civil.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (q. D. g.), y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES

En atencion á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las procedencias de Bremen (Alemania) que hayan salido después del día 23 del mes próximo pasado.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos dentro de la distancia de 165 kilómetros de Bremen, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos, serán admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Consúl español, y donde no le haya, por Consúl de otra nacion, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes de Septiembre anterior, ni en cualquiera otra disposicion que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.

Asimismo serán admitidas las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la *Gaceta* del 31, que hayan permanecido en Bremen durante la epidemia y que hayan salido después del día 13 del mes actual.

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Di-

recciones de Sanidad marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1892.—Villaverde.—Sres. Gobernadores civiles de las provincias marítimas, Comandante general de Ceuta y Gobernadores militares de Alhucemas, Melilla é islas Chafarinas.

En atencion á las noticias oficiales recibidas en este Ministerio, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 40 de la ley de Sanidad y en las reglas 1.ª, 9.ª, 10, 11 y 13 de la Real orden de 23 de Septiembre último,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto declarar limpias las procedencias de Nueva York que hayan salido después del 19 del actual.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así como las de los puntos comprendidos dentro de las distancias de 165 kilómetros de Nueva York, sea cual fuese la fecha de su salida de los mismos, serán admitidas á libre plática, si llegan con patente limpia visada por Consúl español, y donde no le haya, por Consúl de otra nacion, en buenas condiciones higiénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, siempre que no se hallen comprendidas en las reglas 9.ª, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo de 1888; 29, 31 ó 32 de la de 23 del mes próximo pasado, ni en cualquiera otra disposicion que obligue al buque á régimen cuarentenario por sus circunstancias de viaje.

Las mercancías contumaces determinadas en Real orden de 29 de Octubre de 1886, publicada en la *Gaceta* del 31, que hayan permanecido en Nueva York durante la enfermedad epidémica y salgan de dicho punto antes del día 9 de Noviembre próximo, continuarán sometidas en el puerto de llegada al saneamiento prescrito en la referida disposicion.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las Direcciones de Sanidad marítima de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1892.—Villaverde.—Sres. Gobernadores civiles de las provincias marítimas, Comandante general de Ceuta y Gobernadores militares de Alhucemas, Melilla é islas Chafarinas.

(G. núm. 295)

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Almería y el Juez de instruccion de Purchena, de los cuales resulta:

Que en causa seguida por malversacion de fondos contra D. Martín Lopez Ruiz, figuraba un expediente y cuentas que se mandaron desglosar por providencia de 21 de Noviembre de 1891, para que se diese cuenta al Juez de Purchena, y de los que aparece: que en la sesion celebrada el 24 de Mayo del expresado año por el Ayuntamiento de Purchena, el Presidente manifestó á la Corporacion que su antecesor D. Martín Lopez Ruiz, Recaudador á la vez de las contribuciones directas, tenía declarado que la suma recaudada en el tercero y cuarto trimestre del ejercicio de 1889 á 90, la había entregado á D. Antonio Morales Ferrándiz con todos los documentos de la recaudacion de los repartimientos territorial é industrial, para su ingreso en la Delegacion de Hacienda de la provincia, y que todo lo recaudado asimismo en el primer trimestre del ejercicio de aquel año por el mismo concepto, ó sea de territorial é industrial, lo entregó con los recibos pendientes de cobro y demás documentos á su sobrino D. José Lopez Morales, para su ingreso en dicha Delegacion de Hacienda; y resu tando del libro de ingresos del Ayuntamiento haberse hecho varios el día 28 de Septiembre anterior en las arcas municipales, proponía la formacion del oportuno expediente para justificar la verdad de los hechos ocurridos, adoptándose por la Corporacion el oportuno acuerdo, de conformidad con lo propuesto por su Presidente; que segun dicho expediente, se unió al mismo certificacion de los ingresos y gastos, cuyas partidas figuraban en los libros correspondientes de la Corporacion, y que se habían llevado á cabo el día 28 de Septiembre de 1890, negando en la declaracion que prestó el depositario de los fondos municipales, que lo fué en aquella época D. Miguel Fernandez Carrera, la exactitud de algunas de dichas partidas, afirmando que en la Depositaria de su cargo no había ingresado fondo de ninguna

clase durante aquel ejercicio económico; apareciendo asimismo que, requeridos el Alcalde Presidente D. Martín Lopez y el referido Depositario para que presentasen cuenta justificada de los cobros y pagos verificados en el período de tiempo que medió desde 1.º de Julio al 9 de Octubre de 1890, presentó este último la suya acompañada de los documentos al efecto pertinentes:

Que dada cuenta del extractado expediente gubernativo al Juzgado de Purchena, este, entendiendo que del mismo resultaban hechos que pudieran ser constitutivos de delito, ordenó incoar el oportuno sumario en averiguacion de los mismos:

Que estando practicándose por el Juez las diligencias acordadas, el Gobernador de la provincia, á quien el ox Depositario Fernandez Carrera había acudido en solicitud de que requiriese de inhibicion á la Autoridad judicial, lo hizo así de acuerdo con la Comision provincial, fundándose en que los hechos cuya investigacion se proponía el Juzgado, se referían á determinar la legitimidad de pagos ordenados y satisfechos de fondos municipales, cuyos libramientos habían de formar parte de la cuenta del ejercicio de 1890 á 91; á que se contraían los gastos, y cuyo período de formalizacion había terminado después de haberse incoado el proceso; en que dicha cuenta tenía que ser examinada y censurada en primer término por el Ayuntamiento y Junta municipal, y en segundo por aquel Gobierno de provincia, toda vez que su importe no excedía de 100.000 pesetas; y en que mientras la Autoridad administrativa no dictase resolucion con motivo del exámen de las cuentas de que se trataba, no podía el Juzgado sustanciar proceso alguno respecto á los pagos realizados, ni á los demás extremos relacionados con la misma cuenta, existiendo, por tanto, la cuestion previa á que se refiere el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887. Citaba además el Gobernador los artículos 155 al 165, ambos inclusive, de la ley Municipal.

Que sustanciado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdiccion, alegando que no eran de aplicar al caso de que se trataba las disposiciones de la ley Municipal que el Gobernador citaba, porque el Juzgado no se ocupaba en

esclarecer si las mismas habían sido ó no cumplidas; que los delitos que en el sumario se perseguían no habían sido reservados por la ley al conocimiento de los funcionarios de la Administración, ni por parte de la Autoridad administrativa existía cuestión alguna previa que resolver, pues el conocimiento de los delitos de falsedad y estafa lo atribuye la ley á la competencia de la jurisdicción ordinaria. Citaba el Juzgado el art. 2.º de la ley orgánica del Poder judicial y los 548 y 314 y siguientes del Código penal, y el 3.º, 9.º, 12, 13 y 16 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1889:

Que el Gobernador, de conformidad con el dictamen de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 155 de la vigente ley Municipal, que dice: «La aprobación de las mismas (se refiere á las cuentas municipales) cuando los gastos no excedan de 100 000 pesetas, corresponde al Gobernador, oída la Comisión provincial; y si excediese de esa suma, al Tribunal de Cuentas del Reino, previo informe del Gobernador y de la Comisión provincial».

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre, según el que «los Gobernadores no podrán suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa en la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar».

Considerando:

1.º Que relacionados los hechos perseguidos en el sumario que ha dado origen al presente conflicto con la legitimidad ó ilegalidad de las cuentas del Ayuntamiento de Purchena, correspondientes al ejercicio económico de 1890-91, es evidente que en tanto aquéllas no sean censuradas y aprobadas por la Autoridad administrativa á quien corresponda, con arreglo al artículo 155 de la ley Municipal, existe por resolver una cuestión previa, de la cual podrá depender el fallo que en su día dicten los Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

2.º Que se está, por tanto, en uno de los dos casos en que, por excepción, pueden los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, con sujeción á lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en el Real Alcázar de Sevilla á treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 315.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Murcia y la Audiencia de lo criminal de Cartagena, de los cuales resulta:

Que en el periódico titulado *El Palenque*, que se publica en La Unión, correspondiente al día 3 de Abril de 1891, se insertó un artículo denunciando el hecho de que por disposición del Alcalde de dicha villa habían sido llamados unos individuos y con-

ducidos otros al Ayuntamiento; que allí habían sido apaleados y maltratados algunos de ellos, cortándoles á todos el pelo, lo cual, según el dicho periódico, constituía una extralimitación y un abuso de autoridad que debían ser castigados:

Que el Fiscal de la Audiencia de Cartagena dirigió una comunicación al Juez de Instrucción de La Unión, acompañándole un ejemplar del periódico citado en que se hacía la denuncia relatada, para que procediera á la formación del oportuno sumario en averiguación de los hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito, caso de ser ciertos:

Que instruidas las oportunas diligencias criminales, y estimando el Juez que los hechos denunciados podían ser constitutivos de una falta, se inhibió en favor del Juez municipal por auto de 22 de Marzo de 1891, cuyo auto, á petición del Fiscal, fué revocado por la Audiencia de lo criminal; mandando al Juez practicar ciertas diligencias y declarar procesados á los que resultaran culpables;

Que practicadas las diligencias peticionadas por el Fiscal, y resultando méritos para proceder contra el Alcalde de La Unión por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el Juez instructor, por auto de 1.º de Septiembre de 1891, se inhibió el conocimiento del sumario en favor de la Audiencia de la circunscripción, la que en 25 del propio mes y año se declaró competente para conocer de la causa, y dió comisión al Juez de La Unión para continuar el sumario y declarar procesado, con todas sus consecuencias, al Alcalde del expresado pueblo:

Que en su virtud, el Juez, por auto de 12 de Octubre del mismo año, declaró procesados á D. Jacinto Conesa García y Juan Tovar Hernández, y remitió las actuaciones á la Superioridad para la sustanciación de ciertos recursos de apelación, el Gobernador, á instancia del Alcalde de La Unión, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición á la Audiencia, fundándose en que el Alcalde manifestaba que ninguna intervención tuvo en el hecho de autos; pero aun cuando la hubiere tenido siempre resultaría que había obrado dentro del círculo de sus atribuciones, dadas las circunstancias de los detenidos y que lo habían sido á consecuencia de haber promovido un fuerte escándalo en la vía pública; que al ser conducidos los detenidos al Depósito municipal, los agentes, en observancia de las prescripciones legales sobre higiene, los invitaron para que se dejaran asear y cortar el pelo, á lo que accedieron, desde luego, sin oposición alguna; en que las leyes de 11 y 21 de Octubre de 1869 estableciendo bases para la reforma de las cárceles y presidios, comprende, entre otros, los Depósitos municipales, y dictan disposiciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones higiénicas y de salubridad de las mismas; en que el estado en que se presentaron los dichos detenidos, según manifestaba el Alcalde, era verdaderamente peligroso para los demás presos, por lo que se imponía la necesidad del acto de que se trata, con lo cual cumplieron los agentes con las disposiciones legales referidas y con uno de los deberes que pesan sobre los Ayuntamientos, cuales es el de velar por la salubridad é higiene del pueblo y comodidad de sus administrados; en que si en la ejecución de este servicio hubo ó no extralimitación de facultades, era materia que extrañaba una cuestión previa de carácter puramente administrativo, y mientras ésta no se decidiera, no podía calificarse de delito el hecho de referencia, ni existe tampoco competencia en la Au-

diencia para conocer del asunto; y citaba el Gobernador las bases 1.ª, 2.ª y 3.ª de la ley de 21 de Octubre de 1869, artículos 3.º y 4.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, y el 286 de la ley orgánica del Poder judicial:

Que sustanciado el conflicto, la Audiencia dictó auto declarándose competente, alegando que el conocimiento de las causas y del juicio respectivo está reservado á la Audiencia de lo criminal de la circunscripción donde el delito se haya cometido con arreglo á la disposición terminante del núm. 3.º del art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento criminal, que tratándose de un hecho que revestía caracteres de delito de coacción, comprendido en el cap. 6.º del título 12, libro 2.º del Código penal la jurisdicción ordinaria era la única competente para conocer; y no habiendo cuestión previa alguna que resolver, la competencia del Tribunal estaba determinada en el art. 4.º de la ley orgánica del Poder judicial:

Que el Gobernador, de conformidad con el dictamen de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Vista la base 1.ª de la ley de 21 de Octubre de 1869, según la cual los Depósitos municipales se encuentran entre los establecimientos penales á que se refiere esta ley:

Vista la base 2.ª de la propia ley; que dispone se procederá desde luego á la reforma y mejora de todas las cárceles de partido y de Audiencia para darles las condiciones de capacidad, higiene, comodidad y seguridad indispensables para que los detenidos estén debidamente separados por grupos ó clases, según su sexo y edad y la gravedad de los delitos por que fueron procesados; para que puedan disfrutar en la detención, á ser dable y conveniente, de las mismas condiciones que en sus moradas propias; para que puedan dedicarse en lo posible, durante la detención, al ejercicio de su profesión, arte ú oficio; para que la detención, salvo sus efectos inevitables, no pueda influir desfavorablemente en la salud de los detenidos; para que haya el mayor aseo, orden y moralidad, y para que los detenidos puedan cumplir con todos sus deberes.

Los Ayuntamientos de los pueblos cuidarán de que los Depósitos municipales respondan, en cuanto sea posible, al objeto de sus institutos.

Visto el núm. 2.º, art. 72 de la ley Municipal vigente, que encomienda á la exclusiva competencia de los Ayuntamientos la policía urbana y rural, ó sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigilancia de los servicios municipales establecidos, cuidando de la vía pública en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo:

Considerando:

1.º Que el presente conflicto se ha suscitado con motivo de la causa criminal seguida contra el Alcalde y cabo de Guardias municipales del pueblo de La Unión, por el hecho de ordenarse y llevarse á cabo la limpieza y aseo de varios vecinos de La Unión al llevarlos al Depósito municipal.

2.º Que á la Administración corresponde declarar si al ejecutarlos hechos denunciados hubo ó no extralimitación de las facultades que los procesados tenían, en virtud de las disposiciones administrativas, ya respecto de los Depósitos municipales, ya de lo referente á la salubridad é higiene del pueblo y establecimientos que de él dependen.

3.º Que existe, por lo tanto, una cuestión previa administrativa que resolver, la cual puede influir en el fallo que en su día dicten los Tribunales del fuero común; estando, por

consiguiente, el presente caso comprendido en uno de los dos establecimientos en el núm. 1.º del art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, para que los Gobernadores puedan suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en el Real Alcázar de Sevilla á treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 317.)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la comunicación de la Intervención general del Estado en esa isla, fecha 11 de Septiembre último, con la que remite copia de la circular dictada por dicho Centro con el objeto de resolver las dudas suscitadas sobre las atribuciones y facultades que las instrucciones conceden á la nueva Sección temporal de atrasos, y principalmente respecto de la gestión y administración del periodo de ampliación del presupuesto de 1891-92:

Vista igualmente la comunicación de la referida Sección temporal de atrasos de 30 de dicho mes, á la que acompaña copia del informe dirigido á la Autoridad superior de la isla, en cuyos documentos trata en primer término de las facultades que estima corresponderle, de entender exclusivamente de la gestión de dicho presupuesto en su periodo de ampliación, y en segundo lugar, de las demás atribuciones de dicho Centro, entre ellas la de hacer efectivos los recibos atrasados correspondientes á Censos:

Visto el art. 23 de la ley de Presupuestos y los preceptos correspondientes de la instrucción de 29 de Mayo, relativa á los libros de Contabilidad que debe llevarse, la de la Sección temporal de atrasos de 15 de Julio y el Real decreto de 30 del mismo mes creando la Inspección general de investigación, administración y venta de bienes y derechos del Estado:

Resultando que se han suscitado dos cuestiones con motivo de la aplicación de dichas preceptos, la primera, relativa á la gestión del presupuesto de 1891-92, hoy en ampliación, resuelta ya por la Intervención general, y la segunda, la relativa á la recaudación de reditos atrasados de Censos, que al parecer reclama para sí, como atribución propia, la Inspección general de bienes del Estado:

Considerando, respecto de la primera, que es un hecho indudable consignado en la ley y ordenes de este Ministerio, que al fin de normalizar para lo sucesivo la administración y contabilidad de la Hacienda de Cuba, se ha establecido una separación radical y absoluta entre su pasado y su porvenir, creando, para entender en todo lo relativo á los anteriores presupuestos, una Sección temporal de atrasos:

Considerando que la única dificultad que podía ofrecerse para que esta radical reforma fuera por completo realizada, era la del semestre de ampliación del presupuesto de 1891-92, que por referirse á un presupuesto anterior parecía caer bajo la esfera de acción del Centro de atrasos, y por tener la actualidad de un ejercicio abierto á la administración corriente:

Considerando que esta dificultad no

hubiera surgido, como así se prometía este Ministerio, si las reformas hubieran podido plantearse antes de 1.º de Julio y con tiempo suficiente para su desarrollo:

Considerando que dicha imposibilidad en nada desvirtúa el principio cardinal del sistema, pues todo queda reducido á un pequeño aplazamiento respecto á dicho semestre, teniendo en cuenta que en 1.º de Enero ha de pasar con todas sus consecuencias á la gestión eficaz de la Sección temporal de atrasos:

Considerando que en el tiempo transcurrido, de haberse establecido la Sección temporal, hubiera sido mas perturbador para realizar todos los ingresos, pagos y demás servicios de dicho período, que no las consecuencias del aplazamiento acordado:

Considerando que, en la prevision de esta dificultad práctica, y salvando el precepto legal, tanto la instrucción de 29 de Mayo como la de 15 de Julio procuraron en sus preceptos facilitar la transacción, pues de otro modo no hubiera sido posible la gestión administrativa sin grandes protestas y perturbaciones:

Considerando, respecto del segundo extremo, ó sea de la recaudación de réditos de Censos, que la cuestión es más sencilla, pues es de principios, y en ella no puede influir la del lapso del tiempo, y un estudio detenido de los preceptos legales de resolución inmediata:

Considerando que las funciones propias de la Inspección general de bienes del Estado, respecto á Administración, se concreta, según su artículo 14, á la de los bienes ó derechos que se declaren por su gestión propiedades del Estado interin se obtiene su enajenación; de donde claramente se deduce que dicha administración se concreta á los bienes desconocidos, ocultos ó detentados que en virtud de expedientes de investigación descubra la Inspección general, pero no en manera alguna á aquellos que la Hacienda pública tiene ya inventariados, cuya propiedad por parte del Estado sea conocida é indisentible y sus rentas se perciban, cuyos interesados se conozcan y satisfagan sus débitos ó vencimientos de pagarés:

Considerando que á dicho principio, que limita la esfera de acción de la Inspección general únicamente sobre los bienes, de cualquier clase que sean, desconocidos para la Hacienda, se subordinan los incisos 1.º, 2.º y 3.º del citado art. 14:

Considerando, por lo tanto, que no sólo los réditos atrasados de Censos, sino también las rentas de igual clase de todos los bienes cuya administración tenga la Hacienda, y en cuya posesión se halle, así como los pagarés vencidos y no satisfechos, son materia propia de la Sección temporal de atrasos:

Considerando, en su consecuencia, que la Administración activa debe pasar todos los libros, antecedentes y documentos de dichas rentas, pensiones, réditos y pagarés á la Sección de atrasos, incluso los vencimientos no hechos efectivos en el período de ampliación, á contar desde 1.º de Enero:

Y considerando que las rentas, réditos y plazos corrientes corresponden siempre á la Administración, y en manera alguna á los Centros especiales referidos,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, aclarando las dudas suscitadas, lo siguiente:

1.º Que aprueba en todas sus partes la aplicación dada á los preceptos legales por la Intervención general en su circular de 11 de Septiembre último, aplazando la gestión de la Sección

de atrasos respecto del presupuesto de 1891-92, hoy en ampliación, hasta 1.º de Enero próximo, sin perjuicio de facilitar á dicha Sección, con todos los antecedentes y medios de acción, el conocimiento inmediato de los presupuestos anteriores, pues ambas dependencias se dirigen al mismo fin y deben ser armónicas sus funciones.

2.º Que á la Sección temporal de atrasos corresponde la recaudación de todos los que existan por bienes y derechos del Estado, de cualquier clase y naturaleza que sean, debiendo, por lo tanto, hacerse entrega por las Oficinas que corresponda de todos los antecedentes, documentos y relaciones que sean necesarios para desarrollar su acción y cumplir los deberes que le están encomendados.

3.º Que la gestión, administración y recomendación exclusiva de todos los bienes ó derechos que se declaren propiedad del Estado, interin se obtiene su enajenación, corresponde á la Inspección general de investigación.

4.º Que la recaudación corriente por todos conceptos, así como la administración de los bienes y derechos en cuya posesión se halle la Hacienda, corresponde á la Administración general, ó sea á las Secciones de Hacienda, bajo la dirección de sus Jefes respectivos.

5.º Que de todos estos bienes y derechos hoy poseídos por el Estado deben pasar las Administraciones de Hacienda relación detallada en forma de inventario á la Sección de investigación y ventas para que puedan ser enajenados, en cuanto estén sujetos á desamortización ó redención.

De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y el de las oficinas á quienes corresponde el conocimiento de esta resolución, que deberá publicarse en las *Gacetas* de Madrid y de esa capital. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1892.—Romero.—Sr. Gobernador general de la isla de Cuba

(G. núm. 318)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

La declaración contenida en el art. 72 de la ley Municipal vigente, confiando á los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, como de su exclusiva competencia, no se opone, según tiene declarado este Ministerio, al ejercicio de las facultades de inspección que la Constitución del Estado en su art. 84 y la citada ley en el 179 atribuyen al Ministro de la Gobernación como Jefe superior de los Ayuntamientos para examinar sus actos cuando existan causas que lo justifiquen:

Resultando del informe remitido á este Ministerio por ese Gobierno sobre la gestión del Ayuntamiento de Barcelona que la opinión censura la Administración municipal, muy especialmente en lo que se relaciona con su Hacienda; que en el seno de la misma Corporación se ha presentado y aprobado con carácter de urgencia una proposición encaminada á que se practique amplia información que depure el fundamento de los cargos dirigidos contra la misma, y que ese Gobierno estima de absoluta necesidad se

realice un examen detenido é imparcial de todos los ramos encomendados á la Administración del Ayuntamiento de la capital para justificar si los abusos repetidamente denunciados son ó no exactos, y en el primer caso imponer á los que de ellos sean responsables el oportuno correctivo:

Vistos los artículos 179, 180 y 181 de la ley Municipal, y en uso de las facultades de inspección que por la Constitución y las leyes corresponden al Gobierno,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que V. S. auxiliado por el funcionario de ese Gobierno ó de la Diputación provincial que designe como Secretario, inspeccione los ramos y servicios de la Administración municipal de Barcelona é informe á este Ministerio acerca de cuanto resulte.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1892.—Villaverde.—Señor Gobernador civil de la provincia de Barcelona.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REALES ORDENES

Excmos. Sres.: De conformidad con lo determinado en el Real decreto de 10 de Mayo de 1886 y Real orden de 11 de Septiembre siguiente, el día 1.º del mes próximo debe verificarse el 26.º sorteo de amortización de los billetes hipotecarios de la isla de Cuba emitidos en 1886; en su vista, y teniendo en cuenta que el número más alto puesto en circulación de dichos billetes es el 1.184.500,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en el expresado acto se amorticen 1.400 billetes, parte proporcional en centenas completas entre los emitidos y los colocados, y que se comprendan, por consiguiente, en el sorteo los números 1 al 1.184.500, deduciéndose previamente los 25.900 amortizados en los anteriores.

De Real orden lo digo á V. EE. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1892.—Romero.—Señores Delegados en esta Corte del Banco Hispano Colonial.

Excmos. Sres.: Conforme á lo dispuesto en Real orden de 25 de Febrero del año próximo pasado, en uno de los diez primeros días del mes de Diciembre venidero, se ha de celebrar el 3.º sorteo de amortización de los billetes hipotecarios de la isla de Cuba, emisión de 1890; en su vista,

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en dicho

acto se amorticen 400 billetes, que es la parte proporcional entre los 1.750.000 emitidos y los 340.000 puestos en circulación, y que se comprendan, por consiguiente, en el sorteo los números 1 al 340.000, deduciéndose previamente los 2.800 amortizados en los anteriores.

De Real orden lo digo á V. EE. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1892.—Romero.—Señores Delegados en esta Corte del Banco Hispano Colonial.

(Gaceta núm. 320.)

ANUNCIOS OFICIALES

DIPUTACION PROVINCIAL

COMISION PERMANENTE.

Circular.

Segun se observa en el estado que á continuación se inserta, remitido con fecha de ayer á esta Comisión por la Contaduría de fondos provinciales, adeudan los Ayuntamientos á la provincia por arbitrios la suma de 115.332 pesetas 11 céntimos.

Hallándose pendientes de pago varias obligaciones, que aumentarán á fin de mes, esta Comisión en su constante deseo de solventar al día todas las reconocidas y comprendidas en el presupuesto, debe exigir que los ingresos se verifiquen con toda regularidad. Una mala entendida indulgencia ha dado motivo á que algunos Ayuntamientos aparezcan adeudando cuantiosas sumas que hoy le será difícil solventar. A normalizar esta situación, y teniendo presente que las cantidades que se adeudan no se hallan ya en poder de primeros contribuyentes, esta Corporación en sesión del día de hoy ha acordado prevenir á todos los Ayuntamientos que figuran en la relación que á continuación se inserta, que si en el improrrogable plazo de diez días no ingresan en la Caja provincial las cantidades en que se hallan en descubierto, usando de las facultades que el Real decreto de 3 de Mayo le concede, acordará se expidan despachos de apremio contra todos los morosos sin contemplación alguna, pues así lo exige la ordenada marcha de la administración provincial.

Orense 14 de Noviembre de 1892.—El V. P., José Lorenzo Gil.—El Secretario, Claudio Fernandez,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ORENSE

CONTADURIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

RELACION detallada de las cantidades que en esta fecha, son en deber los Ayuntamientos de esta provincia que á continuación se expresan, por orbitrios provinciales.

| Ayuntamientos.. | HASTA FIN DEL EJERCICIO DE | | | | TOTAL. | |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| | 1889-90. | 90-91. | 91-92 | 92-93 | Pesetas. | Cts. |
| Allariz | | 679 70 | | 4 152 22 | 4 831 | 92 |
| Avion | | 456 48 | 734 27 | 1.960 94 | 3 151 | 69 |
| Baltar | | 367 29 | 188 55 | 1.960 95 | 2.516 | 79 |
| Bande | | 309 | | 2.443 91 | 2.752 | 91 |
| Baños de Molgas | | | 1 586 48 | 2.259 26 | 3.845 | 74 |
| Barco | | | | 1 375 70 | 1.375 | 70 |
| Beade | | | | 454 70 | 454 | 70 |
| Blancos | | | | 883 80 | 883 | 80 |
| Bollo | | | | 1.267 34 | 1.267 | 34 |
| Calvos de Randin | | 2.747 85 | 236 83 | 1.347 41 | 4.332 | 09 |
| Carballeda de Avia | | | | 990 87 | 990 | 87 |
| Castrelo del Valle | | | | 969 79 | 969 | 79 |
| Cea | | | | 2 479 49 | 2.479 | 49 |
| Cenlle | | | | 1.153 73 | 1.249 | 85 |
| Coles | | 909 58 | | 1.432 03 | 2 341 | 61 |
| Cortegada | | | 924 21 | 1.096 21 | 2.020 | 42 |
| Chandreja | | | 2.059 48 | 860 28 | 2 919 | 76 |
| Entrimo | | | | 1.063 10 | 1 063 | 10 |
| Ginzo | | 499 85 | | 2.412 36 | 2.912 | 21 |
| Gomesende | | 4 321 48 | 5 170 27 | 1 275 41 | 10.787 | 16 |
| Irijo | | 667 58 | | | 667 | 58 |
| Laroco | 287 | | | 404 12 | 404 | 12 |
| Lovera | | | | 971 05 | 971 | 05 |
| Lovios | | | | 1.421 86 | 1.421 | 86 |
| Maside | | | 648 77 | | 648 | 77 |
| Melon | | | 195 98 | 1.139 96 | 1.335 | 97 |
| Mezquita | | | | 983 90 | 983 | 90 |
| Moreiras | | | | 814 86 | 814 | 86 |
| Muiños | | | 1.322 59 | 1.509 56 | 2.832 | 15 |
| Nogueira de Ramuin | | | 3.281 72 | | 3 281 | 72 |
| Peroja | | | 344 90 | | 344 | 90 |
| Petin | | 1.305 38 | 1.815 47 | 713 37 | 3 834 | 12 |
| Piñor | | | | 1.154 40 | 1.154 | 40 |
| Rairiz de Veiga | | | | 1.472 28 | 1.472 | 28 |
| Rio | | | | 880 62 | 880 | 62 |
| Riós | 1.002 39 | 20 80 | | 1.617 14 | 2.640 | 33 |
| Ribadavia | 246 68 | 394 53 | 1.170 53 | 1.808 31 | 3.620 | 05 |
| Rua | 848 75 | 421 21 | 277 21 | 669 69 | 2.216 | 86 |
| Rubiana | | | 264 54 | 1.137 77 | 1.402 | 31 |
| Sandianes | | | | 1.038 52 | 1.038 | 52 |
| San Ciprian | | | 2.149 35 | 794 03 | 2 937 | 38 |
| Taboadela | | | 798 25 | 801 43 | 1.599 | 68 |
| Toén | | | 1.707 86 | 1.010 39 | 2.718 | 25 |
| Trasmiras | 292 10 | 1.212 55 | | 1.134 21 | 2.638 | 86 |
| La Vega | | | 1.781 16 | | 1.781 | 16 |
| Verea | | | 2.252 65 | 1.447 97 | 3.700 | 62 |
| Viana | | 1.661 45 | 5.093 05 | 2.647 97 | 9.402 | 47 |
| Villameá | | | | 1.100 15 | 1.100 | 15 |
| Villanueva de los Infantes | | | | 631 64 | 631 | 64 |
| Villardevós | | 1 506 61 | 1.127 97 | 1.074 07 | 3.708 | 65 |
| | | | | | 115.332 | 11 |

Orense 14 de Noviembre de 1892.—El Contador, Saturnino Blanco

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA

Circular

Por medio de la presente, se previene á los señores Alcaldes de los Ayuntamientos que á continuación se consignan que, si en un breve plazo, no ingresan en esta Caja especial de primera enseñanza, el importe de las atenciones de instruccion primaria correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, se verá en la sensible necesidad de ponerlo en conocimiento del Sr. Gobernador civil,

para que proceda á lo que haya lugar.

Orense Noviembre 16 de 1892.—El Gobernador Presidente.—Marcial Carballido Bugallal.—Vicente Teijeiro, Secretario.

Relacion que se cita

| | |
|-----------|----------|
| Entrimo | Avion |
| Lovios | Beade |
| Blancos | Melon |
| Rairiz | Viana |
| Sandianes | Barco |
| Trasmiras | Rua |
| Coles | Gadña |
| Nogueira | Mezquita |
| Peroja | |

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del señor Gobernador inserta en el Boletín de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE

AÑO ECONOMICO DE 1892 93

Mes de Noviembre

Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en el Hospital el día de la fecha, con expresion del número de vacantes que

existen en virtud de lo acordado por la Comision provincial en sesion de 15 de Marzo último.

Número de camas disponibles, segun el acuerdo. 74
Idem de enfermos de caridad hasta el día. 74

Vacantes que existen.
Orense 16 de Noviembre de 1892.—El Director, Narciso Serantes.

ANUNCIOS

IMPORTANTÍSIMO

Habiéndonos manifestado varios señores Alcaldes y Secretarios deseos de adquirir el Libro Maestro por el precio primitivo, fundándose en que si no lo solicitaron á su tiempo fué motivado á la perentoriedad del plazo que se dió, la administracion de El Secretariado atendiendo á las razones expuestas abre un nuevo término que durará hasta el 30 de Noviembre, durante el cual se servirán á correo seguido y por el precio de 35 pesetas á los que lo soliciten directamente y 40 á los que lo compran en las librerías, todos los pedidos que se soliciten de el Libro Maestro ó sea Diccionario práctico de administracion indispensable á todas las oficinas municipales y judiciales, por cuanto se halla recopilada la legislacion en sus voluminosos tomos con mas de 4.000 formularios para todos los servicios de dichas dependencias, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo, costará la obra 50 pesetas en todas las expendedorías.

Pídase al Director de El Secretariado domiciliado en Madrid calle de S Mateo, 12 y 14, acompañando su importe en libranza ó otro medio de fácil cobro, quien lo servirá inmediatamente encuadrados los dos tomos con lujo, certificados y francos de porte embalados con su caja correspondiente.

Aviso.—Se sacan en subasta pública y voluntaria por acuerdo de los herederos del difunto D. Ignacio Saenz Pastorvecino que ha sido de esta ciudad, y con autorizacion del consejo de familia por el interés de los que son menores bajo el tipo de 16.000 pesetas, siete fincas urbanas y rústicas sitas en los términos de Pazo que es una casa de alto y bajo y otras dos terrenas, una destinada á lagar y otra á cuadra; Bacelar y por otro nombre C-preses, finca rústica cerrada con destino á labradío, un estanque, viñedo, era y un hórreo, de superficie mayor de 128 áreas; al de Viñal otra finca cerrada destinada á labradío y viñedo de una hectárea 24 áreas y 33 centiáreas; al de Cabadas 45 áreas 28 centiáreas de viñedo y labradío con castaños; al de Cachazuas un prado, labradío y monte con molino harinero inservible de unas dos hectáreas, 47 áreas 29 centiáreas de superficie con castaños; al de Pinavetes ó Piñeiral un monte con pinos y labradío de una hectárea 10 áreas 64 centiáreas y al de la Velá y Rial otro monte de seis hectáreas 73 áreas y tres centiáreas con castaños; cuyas siete fincas están sitas en la parroquia de San Miguel de Canedo, término municipal del mismo nombre.

Se admiten proposiciones ó posturas hasta el día 13 de Diciembre próximo, de once á doce de la mañana que se otorgará remate á favor del más ventajoso postor, en la Notaria de don Modesto Morais Perez, sita en la casa número siete de la calle de las Tiendas, donde están de manifiesto el pliego de condiciones, los documentos de pertenencia y la autorizacion para la venta.

Orense 15 de Noviembre de 1892.—Miguel Valcarce.

—3

VENTA

A voluntad de su dueño se vende la mitad de la casa señalada con el número 33, en la calle de Santo Domingo de esta ciudad, con su patio ó resio: dará razón el Procurador Berjano.—27.

Imprenta LA POPULAR